

# LA UNION

## SEMANARIO MINISTERIAL

Director y Redactor:  
ROMULO E. DURON

Colaborador:  
CARLOS A. GARCIA

SERIE IX

Tegucigalpa: 17 de Agosto de 1898

NUM. 103

### "LA UNION"

SEMANARIO MINISTERIAL

Director y Redactor:—ROMULO E. DURON

Colaborador:—CARLOS A. GARCIA

#### CONDICIONES:

Se publicará todos los sábados.  
Suscripción por mes..... 50 centavos.  
Número suelto..... 15 „  
Avisos:—10 centavos línea por la primera inserción y \$ 0.05 por cada una de las siguientes. — Anuncios permanentes precios convencionales.

La Redacción sólo responderá por sus artículos firmados.  
Se publicarán gratis los comunicados que á juicio de la Redacción sean de interés general.

Toda la correspondencia relativa á anuncios deberá dirigirse únicamente al Administrador.

#### ADMINISTRACIÓN:

TIPOGRAFIA NACIONAL,  
Tercera Avenida E., Núm. 42

### CONTESTACIONES

Comayagüela: 11 de julio de 1898.

Señor Presidente Doctor don Policarpo Bonilla.—Tegucigalpa.

Señor:

He tenido el honor de recibir, con su apreciable comunicación de 8 del corriente mes, un ejemplar del Proyecto de Constitución que la Honorable Dieta de la República Mayor de Centro América ha sometido á la consideración de la Asamblea Constituyente reunida en Managua el 24 de junio último.

Estudiaré con el detenimiento debido el proyecto en relación; y aunque por mis escasísimas aptitudes no podré dar una opinión que algo signifique, lo haré por tratarse de un asunto de tan marcada importancia para el país y por corresponder á la excitativa que Ud., sin merecimiento alguno, ha tenido la bondad de hacerme.

Soy de Ud., señor Presidente, su respetuoso seguro servidor.

CAMILO T. DURÓN.

Comayagua: 29 de julio de 1898.

Señor Doctor don Policarpo Bonilla, Presidente del Estado.—Tegucigalpa.

Señor:

Tuve el honor de recibir la carta que Ud. me dirigió el 8 del mes actual, juntamente con un ejemplar impreso del Proyecto de Constitución que la Honorable Dieta de la República Mayor de Centro-América sometió á la consideración de la Asamblea Constituyente reunida en Managua el 24 de junio último.

He leído el Proyecto en referencia con la atención que se merece; y, en conformidad con el deseo de Ud., cumplo manifestarle que, á mi juicio, ese trabajo es digno de sus autores, como que responde satisfactoriamente al objeto que los señores Presidentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras se propusieron al celebrar el Pacto de Amapala.

Soy de Ud. atento servidor.

JESÚS INESTROZA.

Comayagüela: 29 de julio de 1898.

Señor Doctor don Policarpo Bonilla, Presidente del Estado.—Tegucigalpa.

Muy señor mío:

Aprecio y agradezco el alto honor que se ha servido discernirme, consultando mi opinión sobre el Proyecto de Constitución Política, elaborado por la Honorable Dieta, para la República Mayor de Centro-América.

Reconozco el escaso valor de mi parecer; pero en la circunstancia en que Ud. me ha colocado y ante la magnitud del problema de que depende la prosperidad de Centro-América, no vacilo en emitirlo.

Comienzo por manifestar que no soy partidario de la forma unitaria de Gobierno, adoptada por la Honorable Dieta. Ciertamente esta forma tiene sus ventajas y era la que convenía para el estado social de los pueblos centro-americanos en 1824; pero no es la que conviene para esta época, en la que, por virtud de la vida independiente que hemos llevado desde 1839, se han desarrollado intereses que requieren respeto y se han creado circunstancias que han producido responsabilidades de crédito, en cada país, en las que ninguno de los otros querría tener participación. Así por las mismas razones que en 1824 hubiera sido yo partidario de la forma unitaria, hoy día soy federalista. Para el caso de adoptarse irrevocablemente la forma federativa, yo propondría que el distrito federal se crease del departamento de Tegucigalpa y de la Isla de Amapala con la extensión intermedia que, para la comunicación, fuera necesario ceder, de los departamentos de Choluteca y Valle; debiendo establecerse la capital en Tegucigalpa y erigirse á Comayagua en capital del Estado.

Aparte de esto, hay algunos puntos de detalle en que no estoy de acuerdo con el Proyecto. Me referiré á los tres principales.

1.º—Dice el artículo 88 que no podrá iniciarse ni seguirse contra los Diputados y Senadores, juicio alguno civil desde el día de su elección hasta quince días después del receso del Congreso, y que dentro del mismo término no podrán ser juzgados criminalmente por los delitos que cometan sin que se declare previamente que ha lugar á formación de causa.

Indudablemente conviene rodear de inmunidades á los individuos del Poder Legislativo; pero no de manera que se pueda lesionar á los particulares en sus derechos civiles y pueda hacerse frustránea la acción de la justicia en lo criminal. Creo preferible lo que á este respecto dispone la Constitución de los Estados Unidos de América, esto es, que los Diputados y Senadores gozarán en todos los casos, excepto en los de traición, felonía (crimen que merece la pena capital), ó de atentado contra la paz, del privilegio de no ser arrestados mientras asistan á las sesiones de sus respectivas Cámaras ni cuando se dirijan á ellas ó vuelvan de ellas.

2.º—Ante las lecciones de la Historia, no es defendible la organización pluripersonal del Poder Ejecutivo, que se establece en el artículo 109. Los triunviratos en la antigua Roma, el gobierno de los Duxes en Venecia, el Directorio en Francia, el Consulado en el mismo país, en sus primeros tiempos, y la Junta de Gobierno de la antigua República de Guatemala demuestran los inconvenientes de esa organización. En ella, ó predomina uno exclusivamente ó no se avienen todos entre sí, y de uno y de otro modo resultan perjudicadas la sociedad y las instituciones. Se me dirá que en Suiza el ejercicio del Poder Ejecutivo por el Consejo Federal no ha traído dificultades; pero bien sabemos que nuestros países no se hallan en las especialísimas condiciones en que Suiza está. Por consiguiente, yo opinaría que se encomendase el Poder Ejecutivo á un solo ciudadano con el nombre de Presidente de la República.

3.º—Muy inconveniente me parece lo que se prescribe en el artículo II de las *Disposiciones transitorias*. A mi juicio, debe ser electa popularmente la persona llamada á ejercer el Poder Ejecutivo. Creo que se comprometería el éxito de la grande obra con una elección hecha por la Asamblea. Si del escrutinio resultase que ningún candidato hubiese obtenido mayoría absoluta, entonces correspondería á la Asamblea hacer la designación, aunque tuviese que prolongar sus sesiones por todo el tiempo necesario.

Y aquí pongo punto final á mis breves observaciones, porque otros detalles en que estoy en desacuerdo con el Proyecto son de menor importancia.

Acepte el señor Presidente mis respetos y consideraciones.

RÓMULO E. DURÓN.

Gracias: 31 de julio de 1898.

Señor Doctor don Policarpo Bonilla, Presidente del Estado.—Tegucigalpa.

Mi estimado señor:

Tengo el honor de referirme á la interesante circular de Ud., de 6 del mes que fina, recibida por el último ordinario de esa capital, que se contrae á recabar la opinión de los hombres ilustrados del país sobre el Proyecto de Constitución que, de la República Mayor de Centro-América, ha elaborado la Dieta que reside en Managua, y del cual se sirve adjuntarme un ejemplar impreso.

Humilde como tiene que ser la opinión mía, tratándose de un asunto de tan capital importancia, he creído, sin embargo, que era deber y derecho de todo buen ciudadano aportar el contingente de su patriotismo, ya que no le fuese dado el de sus luces, para una obra de común y altísimo interés para la patria, como lo es necesariamente su Carta Fundamental, y, por eso, desde que se publicó por la prensa nacional el aludido Proyecto, escribí á la ligera algunas observaciones sobre sus puntos más culminantes, y los envié al periódico "La Unión." Ahora que Ud. me discierne la honra de consultar mi modesto voto, me permitirá agregar algunas otras breves y sencillas consideraciones.

Desde luego conceptúo el Proyecto aludido un documento notable por la forma y por el fondo, y destinado á servir de base á las amplias y luminosas discusiones de que será objeto por parte de una corporación como la Constituyente, formada de personas de reconocida ilustración y competencia; discusiones que habrán de conciliar las discrepancias ó incongruencias de detalle del Proyecto, á fin de dar unidad de plan á todas sus disposiciones.

Son sus puntos culminantes:

1.º *Régimen político unitario*.—Merece este punto mi más completa adhesión. El sistema federal nos dejaría como estamos, y nada se habría adelantado desde el Pacto de Amapala á la fecha. Los Estados quedarían siempre soberanos y sujetos á los disturbios interiores de siempre, y aun á complicaciones entre sí, que el Poder federal se limitaría á deplorar y á buscarles arreglo, con menos eficacia y resultado, quizás, que lo que sería de esperarse de un mediador amistoso. Así sucedía en Colombia antes de 1885, en que de Federación pasó á República unitaria.

Nuestro atraso indisimulable y los hábitos adquiridos bajo el desgobierno de cada Estado, no nos permiten acariciar esperanzas de positiva mejora sino es bajo un gobierno fuerte y vigoroso por sus elementos y medios de acción, que, al mismo tiempo que tenga la capacidad de mantener el orden, abrigue respecto de su estabilidad la debida confianza, á fin de que pueda consagrar sus energías al cumplimiento de su misión, y no malgastarlos en precaverse de los ataques que se le dirijan ó que él crea le puedan dirigir.

En el exterior, la Federación no alcanzaría el prestigio y respetabilidad que la Unión; y en el caso, no remoto, de un conflicto internacional, proveniente de una provocación real ó supuesta de alguno de los Estados, la impotencia del Poder federal para actuar en otro terreno que en el de la diplomacia, poco firme por cierto, se haría manifiesta. El istmo entero sabe que si hubiera estallado la tempestad que se dibujó en el horizonte centro-americano, en los primeros meses de este año, la Dieta de la República Mayor no habría tenido coherencia para contrarrestarla y que su disolución de hecho se habría realizado.

Es indudable que los intereses creados por el tiempo y las ambiciones de círculo deben consecuentemente ofrecer obstáculos á la Unión; pero esos obstáculos se exageran, ya que es imposible que no los haya, de más ó menos bulto, en toda empresa nueva, y que no crezcan á medida de la importancia de esta. Toda innovación suscita resistencias, como toda acción produce una reacción, así en el mundo físico como en el mundo moral; pero al buen sentido, á la sensatez, al patriotismo corresponden pesar los bienes y los males que de esta obra se han de derivar; y si los primeros sobrepujan á los segundos, la obra debe emprenderse con fe, porque la humanidad camina en pos de su perfección, y el bien casi nunca se obtiene sin sacrificios, como tampoco las gran-



des victorias sin lucha. Si en la sociedad sacrifica el individuo humano parte de su libertad natural por asegurar el goce de sus derechos primordiales, en la Unión bien pueden las entidades llamadas á formarla, sacrificar intereses secundarios con el santo objeto de constituir un poder robusto dotado de la fuerza necesaria para alcanzar cumplidamente los fines que corresponden á toda asociación política.

Cuando el desarrollo obtenido bajo un régimen propio para afianzar la paz y promover el adelanto, dé á los miembros de la Unión suficientes elementos de vida propia, entonces podría modificarse el pacto de hoy aflojando los lazos que los unen al Centro. Ahí tenemos á México prosperando admirablemente desde que el federalismo se ha convertido en un régimen netamente unitario. Los ideales democráticos se resienten mucho de ese sistema de gobierno; pero el progreso alcanzado en todos los órdenes de la vida pública vale la pena de postergar esos ideales para una época en que el progreso mismo tenderá á su realización, sin esas conmociones que empobrecen y arruinan á los pueblos.

Hoy, pues, respecto á la unión de los Estados, puede hacerse, por medio de la abnegación y del patriotismo, lo que de todo Centro América estuvo á punto de hacerse en 1885, por la fuerza y sobre charcas de sangre, y que dejó de hacerse no porque fuera malo hacerlo así, sino por un mero accidente que bien pudo no ocurrir.

2.° *Forma pluripersonal del Ejecutivo.*—Mi humilde opinión es que debieran formarlo cinco, en vez de tres Delegados, que deberían funcionar con un Secretario general, con el cual serían seis miembros, para que les tocara dos á cada provincia. Los cinco Delegados despacharían en cuerpo los asuntos de todos los ramos, aunque los decretos sólo se autorizaran por el Presidente del comité ejecutivo y su Secretario. El Presidente sería nombrado para un año, sin lugar á reelección ó á segundo turno; y siendo el período presidencial de cinco años, todos los Delegados llegarían á ejercer la presidencia. Semejante arreglo sería molesto y laborioso; pero los empleos públicos en los países republicanos son servicios y no beneficios, harto retribuidos con el honor de la posición y con el sueldo. Un gobierno pluripersonal con ministros para todos los ramos, sería una monarquía colectiva, de una función harto, asaz embarazosa. Debería haber dos Delegados suplentes.

3.° *División del Cuerpo Legislativo en dos Cámaras* (la de Diputados y la de Senadores). La razón y la experiencia han demostrado cuánta conveniencia entraña esta disposición. Los doctores Arias (don Céleo) y Gómez (don Crescencio) sostuvieron luminosamente, en 1880, la teoría bicamarista, y sus sesudos argumentos son dignos de consultarse en el folleto "Del sistema bicamarista."

4.° *Abolición de la pena capital, para el asesinato, parricidio, y otros delitos atroces en el orden común y militar.*—Por separado y extensamente he expuesto mi opinión de entera conformidad con este canon constitucional, en los artículos que he enviado á "La Unión." La cifra de los asesinatos cometidos en Honduras desde que se abolió la pena capital, es espeluznante, y entre ellos figuran, que sepamos, dos parricidios horribles. Este argumento práctico echa por tierra todas las teorías optimistas contra la pena capital. Si queremos la inviolabilidad de la vida, armemos á la sociedad con el arma terrible de la muerte.

5.° *Supresión de la prisión por deudas cualquiera que sea su procedencia.* (Es decir, aunque haya dolo, fraude, estafa.) También he expuesto ya mi más completa reprobación acerca de este precepto que juzgo inmoral y corruptor, por cuanto desampara la propiedad y patrocinia la mala fe. No me explico cómo puede haber un solo hombre de bien que apoye semejante ley, espada de dos filos que así ataca al propietario como al que carece de medios, pues este último se ve imposibilitado para conseguir recursos con qué desarrollar su actividad, desde que el comercio, por el justo temor de la pérdida probable, se torna receloso y esquivo. Las industrias serán desfavorablemente afectadas, circunscribiéndose las operaciones de crédito á los contratos hipotecarios.

El artículo 14 sujeta á responsabilidad al empleado inferior que de orden superior viola la Constitución, pero exige á los militares de ella, cuando por lo común esas violaciones se ejecutan por militares. La fuerza militar no debe deliberar tratándose de sus funciones peculiares, de asuntos de disciplina, de operaciones bélicas; pero en tiempos normales no debe ser instrumento de los que manifestamente atacan los derechos garantidos por la Constitución, ejerciendo violencia contra los ciudadanos inermes. Esta exclusión nos parece ilógica.

Si la mente del artículo 24 es la de prohibir los contratos de trabajo personal, aun por tiempo limitado, entre un jornalero y un propietario, lo juzgamos perjudicial en alto grado á unos y otros, y llamado á herir profundamente á nuestra industria por excelencia—la agrícola—atrofiada por falta de brazos. El individuo es libre para obligarse á todo lo que sea lícito, ó para no obligarse á nada; pero una vez obligado, debe cumplir los pactos que ajuste. Si se le autoriza para quebrantarlos, negando la ley su sanción á lo

pactado, esa disposición completaría la obra del mal que se intenta con la supresión de la prisión por deudas.

El artículo 62 declara ciudadanos, entre otros, á los que tengan un medio legítimo de subsistencia. De este medio sólo carecen los idiotas y físicamente impedidos, pues el jornalero más rústico es capaz de vivir de su trabajo, como enteramente inhábil para ejercer las altas prerrogativas del ciudadano. Como lo más importante de estas prerrogativas es la del sufragio, desearíamos que únicamente se otorgase á los que son capaces de comprenderla y de hacer de ella un uso tan digno para sí como provechoso para la colectividad. En consecuencia, pensamos que para ser ciudadano es menester la mayoría, la posesión de bienes por valor de \$ 300 en defecto de la enseñanza primaria, ó el ejercicio de un oficio ó industria que produzca el doble del jornal común. Son obvias las razones de esta restricción. El hombre que ha recibido la instrucción primaria, el que posee un pequeño acúmulo de ahorros y el que gana, además de lo necesario para subsistir, algo que poder acumular como propiedad, tienen cierta conciencia de su personalidad política, abriga determinadas aspiraciones y se dan cuenta de la importancia del derecho que se les reconoce; al paso que el infimo jornalero, el analfabeto, falto de estas dotes humildes, regala ó vende indiferentemente su voto, ó no tiene interés alguno en darlo, ni en intervenir en la cosa pública, aun en la más humilde escala. Esta clase de ciudadanos pervierte la República, en vez de servirla en su opinión, porque se presta á ser ciegamente instrumento de las intrigas ó imposiciones.

El inciso 3.° del referido artículo impone la pérdida de la ciudadanía al condenado por delitos graves, sin decir cuáles son éstos, aunque lo justo sería que los perdiesen todos los que fuesen condenados á pena de presidio.

El inciso 3.° del artículo 88 contiene una excepción inmoral en favor de los miembros de los altos poderes, declarándolos inmunes mientras la corporación á que pertenecen no los declare enjuiciables. Aunque sería una irregularidad la intromisión del Poder Legislativo en asuntos privativos del Judicial, todavía sería mejor, en obsequio de la justicia y de la moral social, el establecer que aquel Poder tuviese la facultad de pedir á los tribunales que tuviesen encausado á uno de sus miembros, copia del proceso para examinar si éste tenía ó no razón de ser, y en este último caso llamar á su seno al procesado. Pero impedir que éste lo sea, mientras el cuerpo á que pertenece no lo declare con lugar á serlo, es decretar la impunidad y autorizar el crimen. El delincuente debe estar sujeto á la ley y es tanto más responsable su conducta cuanto más elevada sea la posición que ocupa, pues su encubrimiento lo obliga á ser más respetuoso con la ley y á dar buen ejemplo á los demás. Como las Cámaras no son una corporación permanente, sino que se reúnen anualmente, el delincuente que á ellos pertenece andará impune durante su receso, y podrá fugarse antes de que nadie ose prenderlo. Esto es revivir el privilegio de las antiguas *Casas de Cadenas*, en cuyo recinto una vez alcanzado, eran inviolables los delincuentes.

Los Consejos departamentales, si se han de parecer á los que tenemos actualmente, son poco menos que inútiles desde que desempeñan gratuitamente su encargo. Todo empleo que no es retribuido se desempeña mal. El nombramiento de tales empleados sólo sirve para inhabilitar en los departamentos ó en cada uno á cuatro individuos para los servicios municipales, que también debieran ser retribuidos si se quiere que la función sea de provecho. Si en cada departamento hubiese el personal necesario y los recursos indispensables para hacer pluripersonal el gobierno seccional, asumiendo las funciones político-militares, la institución daría los mismos excelentes resultados que está llamado á dar en esta forma, el gobierno nacional.

Tales son, señor Presidente, las ideas que me han sugerido la lectura del Proyecto, y que me es honoroso presentar á Ud. con mis respetuosas consideraciones de estima, como su más atento servidor.

JEREMÍAS CISNEROS.

Tegucigalpa: 1.° de agosto de 1898.

Señor Doctor don Policarpo Bonilla

Pte.

En su oportunidad, tuve el gusto de recibir la circular de Ud., en que se sirve manifestar su deseo de que le exponga, por escrito, mi parecer, acerca del Proyecto de Constitución que ahora se discute en la Asamblea Constituyente, reunida en Managua el 24 de junio recién pasado. Doy á Ud. mis agradecimientos por la altísima honra con que me favorece.

El ideal justamente acariciado por los nobles patriotas centroamericanos, encaminado á la reconstrucción de la Antigua Patria, es indudable que cada día se acerca más á la realidad. Qué grande, qué saludable sería para estos países disgregados, que la abnegación y el patriotismo formasen un admirable consorcio, para que huiera de nosotros la idea separatista, engendrada por mezquinos intereses y que nos hace dudar de que los hombres que hoy rigen muy altos destinos nos quieren dar una patria grande!

Muy dignos de los levantados propósitos de Ud. me parecen los conceptos de su importante circu-

lar, y debo asegurarle, con entera sinceridad, que deseo en la forma que sea posible, pero al favor de las conquistas de las armas de la paz, la realización de tan magna empresa. Solamente la ambición y el localismo tradicional, podrán crear nuevas disensiones ó despertar las anteriores en contra del medio más seguro de evitar nuestras desgracias: la Unión de Centro América.

El punto de mayor trascendencia en el Proyecto de Constitución elaborado por la Honorable Dieta de la República Mayor, es sin duda la forma de Gobierno que debe darse á la nueva entidad política, para hacerla más estable, mientras es posible su consolidación definitiva; las otras disposiciones son esencialmente las mismas consignadas en los Códigos Fundamentales de las secciones que formarán la República de Centro América, con ligeras novedades, que habrá que aumentar ó reformar, según lo demanden el progreso y completo bienestar de los países hermanos. La forma unitaria, en mi humilde concepto, sería más ventajosa para alcanzar los fines de la Nacionalidad; pero no sólo por razones históricas, sino por nuestro modo de ser, es más aceptable, por hoy, la forma federal.

De muy buena voluntad, y en la medida de mis aptitudes, desearía consignar aquí todo lo que he pensado, después de la lectura del Proyecto; pero insisto en mi creencia de que para llevar á feliz término una obra de tanta magnitud, hay que comenzarla de la manera que sea posible, dentro de los límites de la civilización, para llegar después á su perfeccionamiento. A veces se me figura que los autores del Proyecto nos levantan muy alto sobre el nivel en que nos encontramos; y noto, por otra parte, que al amparo de una República fuerte, poderosa, la libertad y otros principios que integran la personalidad humana, se dejan ver como en una República pequeña, que no tiene confianza en su propio valer. Pero es lo cierto que el trabajo de la Honorable Dieta, es sumamente avanzado y concuerda con las más brillantes teorías de varios publicistas modernos.

Hago votos por que el mejor éxito corone, en esta vez, las labores felizmente iniciadas en pro de la rehabilitación política de Centro-América; y tengo á mucha honra suscribirme de Ud., con sentimientos de la más distinguida consideración, muy atento y seguro servidor.

MANUEL S. LÓPEZ.

## Periodismo

### III

Henry Rochefort es uno de los mejores periodistas de la Francia contemporánea. Palpitantes en la memoria de la nueva generación literaria de aquel país están los ruidosos triunfos de ese terrible viejo, que han hecho resonar en los ámbitos del mundo los clarines de plata de la fama. El pensamiento humano encontró en ese rudo luchador al hombre de hierro que lo impulsara en la conciencia de las multitudes; y han sido sus esclavos los apóstrofes vibrantes, la frase áspera, brilladora como un puñal, la cruel ironía, el sarcasmo sangriento, en las luchas del diarismo independiente; así como en épocas de pacíficas contiendas su lenguaje sereno, su benevolencia generosa han dado pruebas de la rectitud de su alma. Admiro á Rochefort porque ha sido valiente defensor de hermosas causas, porque ha figurado casi siempre en las filas de los oprimidos y sus principios y doctrinas están basados en el Derecho y la Libertad. Últimamente sus artículos fogosos han hecho simpática en Francia la independencia de Cuba.

Las hazañas de ese bravo candillo de la prensa debieran en su mayor parte servir de estímulo á los jóvenes escritores políticos que deseen de jar un nombre ilustre en los anales periodísticos de su época. Es muy noble el amor á los grandes ideales y la lucha constante por llevarlos á la práctica; muy noble ser defensor de la justicia bajo las diferentes formas en que puede presentarse; ser escudo fuerte é invulnerable contra los golpes que el poderoso asesta al oprimido; elevar la enérgica voz de la protesta contra el crimen y las ruines acciones; presentarse, en fin, como un mártir estoico ante las iras de un tirano, defendiendo con todas las fuerzas vitales los derechos sagrados del pueblo, las leyes patrias, las instituciones de la justicia y del honor. Hablo en términos abstractos de la bondad que trae consigo la lucha por esos ideales generosos. Concretándome á los partidos políticos, á las agrupaciones patrióticas, podría citar algunas revoluciones redentoras, en las que la prensa independiente, el periodismo vigoroso y bien intencionado, ha dado principio á grandes evoluciones sociales y políticas.

Es hermoso luchar en las batallas de la prensa cuando se lleva el cerebro poblado de generosas teorías y el alma abierta benévolamente á todas las inspiraciones del patriotismo, á todos los impulsos de humanidad, á todos los consejos del deber: cuando el periodista ve á lo lejos, en el brumoso cielo, la estrella radiante que le guía por la senda de la virtud y de la gloria, como el lucero de los reyes magos al misero establo de Belén. Es hermoso el combate cuando se entra en él impulsado por un derecho divino, con la frente erguida y el espíritu rebosante de abnegaciones; cuando se lucha con armas leales y no se



ofende al enemigo por la espalda; cuando la palabra, la frase del razonamiento verdadero no se convierte en látigo miserable, en infame calumnia ó en hipócrita burla; porque entonces la lucha franca de principios y aspiraciones se convierte en escándalo público, que hace surgir, como de un antro sombrío, los intereses personales, las anécdotas íntimas, hasta los detalles ligeros del mundo sagrado del hogar. Entonces pasa el periódico á ser pasquín, libelo de negros párrafos, de cobardes artículos, de gacetillas en que á cada vocablo se sublevan la honradez y la conciencia de los lectores que poseen sentimientos elevados y nobleza de carácter.

El periodista honrado y digno no sólo tiene que luchar contra las costumbres y vicios de ciertas clases sociales, sino también, y esto con frecuencia, contra las tendencias funestas de las épocas de transición por que atraviesan los países y en las que el sentimiento de justicia y equidad existe apenas en una escasa minoría de personas. Tal cosa ha sucedido recientemente en Francia, con motivo del asunto Dreyfus, en el que Emilio Zola ha jugado un brillantísimo papel, á despecho de los que quieren arrojar todo sobre la noble conducta de ese ilustre escritor.

Si en todo lo que se relaciona con la justicia humana los periodistas siguieran el ejemplo de Zola, la historia del porvenir no tendría que registrar páginas tan sombrías como las del proceso del infeliz capitán condenado á una muerte cruel en una isla áspere y solitaria, convertida desde hace un siglo, desde la tremenda revolución de 1793, en cementerio de reos políticos. Si acaso las prodigiosas obras de Zola no fuesen suficientes á abrirle ancho campo para entrar con paso de triunfo á la región de los inmortales de este siglo, le bastaría esa página honrosísima de su vida de luchador, para hacer que su nombre pase á las generaciones futuras con todo el prestigio que da el sublime apostolado de la justicia.

En la prensa independiente, en el periodismo de combate, es quizá donde con mayor razón debe exigirse al escritor imparcialidad, franqueza y buena fe. Claro está que quien ataca debe poseer un extenso caudal de razonamientos para convencer al enemigo; y por sabido se calla que la mejor arma contra un adversario honrado, es la verdad. Ante un hecho real y probado, no hay argumentación posible. Pero nunca, por ningún motivo deberá echarse mano de la suposición, de la mentira, para hundir al contrario. Muchas veces el escritor se deja llevar por sus pasiones á un terreno lastimoso y resbaladizo, del que nunca podrá salir con honra; por lo que, lo repito, jamás, para atacar á alguien, se deben inventar hechos, hijos sólo de la apasionada fantasía ó de la ruindad del carácter y del espíritu.

F. TURCIOS.

## LA PENA CAPITAL

En el estado natural todo hombre tiene derecho de matar al que viola las leyes naturales, y este derecho se trasmite á la sociedad al tiempo de su formación.—*Filangieri*

El derecho á la existencia es inviolable, pero á condición de no atacar otra existencia.—*Bocresco*.  
La pena de muerte es justa porque es necesaria.—*Diderot*.

No digo que se suprima la pena de muerte, sino que se la desembarace de los tormentos que la acompañan.—*Montaigne*.

Cómo conciliar la inviolabilidad del derecho á la existencia con el unánime asentimiento de todos los pueblos y de todos los siglos cultos en favor de la pena de muerte?—*Tejedor*.

Las tendencias altruistas son sobrepajadas por el egoísmo, la mala fe, la avaricia del goce y del dinero, la cólera y la venganza. Diariamente leemos aquí, y de allende el mar, descripciones de crímenes repugnantes cometidos por motivos insignificantes, con calculada y fría perversidad. Se mata para robar, se violan criaturas de cuatro años y aun de menos. Mientras esto sucede, y el respeto por la vida humana no sea una realidad, la pena de muerte no puede dejar de ser mantenida. Es el arma terrible y poderosa de que la sociedad dispone para garantizar á los hombres honrados contra los monstruos sanguinarios. En las prisiones, por más severa que sea la disciplina y por más atenta que sea la vigilancia, el criminal puede asesinar á sus compañeros ó á sus guardianes, y evadirse. En Italia hubo una proporción de 15 evasiones por año de 1870-80.—*El Cerro del Plata*.

La pena de muerte sólo debe reservarse para los asesinos y para los que cometan crímenes de los cuales la muerte sea una consecuencia necesaria y racionalmente prevista.—*Jeremías Cisneros*.

No es nuestro ánimo escribir un tratado filosófico, ni engolfarnos en un estudio profundo, sobre la pena de muerte. El asunto lo merece sobradamente, pero el trabajo excede á nuestras aptitudes y no estaría de acuerdo con nuestro objeto del momento que es el de hablar á la conciencia de la sociedad, ligeramente, presentándole las consideraciones más atendibles y obvias en favor de una pena cuya aplicación reclaman su reposo y su seguridad, ya que se trata de emitir la Carta Fundamental de la República Mayor, que puede pasar de la esfera de las esperanzas á la de una realidad magnífica.

En 1894 expusimos algunas de estas consideraciones, cuando se anunció que iba á borrarse de la Constitución la pena de muerte, y se borró en seguida con el entusiasmo con que se realiza una imperecedera conquista; aunque, en verdad, lo que se hizo—y los hechos subsiguientes lo han demostrado con elocuencia—fué dar un paso en

el camino del retroceso, porque esa ley es contraria á nuestro estado social, á nuestros peculiares intereses y á nuestro adelanto positivo, como lo es el reposo y seguridad del género humano.

La ley que en Egipto, por ejemplo, sujetaba á los grandes del reino que, durante su vida, habían ejercido un poder más ó menos exorbitante, á un juicio póstumo en que sólo la justicia más estricta debía hacer oír su voz, y era la única ciertamente que la dejaba oír, ¿qué valdría para un pueblo de ilotas ó bastantemente atrasado para que en él no se manifestase como un poder la opinión pública y, consiguientemente, careciesen en él de sentido práctico las palabras honor, infamia, virtud, vicio, celebridad, oprobio, y todas las que expresan el aplauso de la sociedad para los que obran bien, y su vituperio para los que se lanzan por la senda del mal?

Una ley igual á la de Egipto sería para nosotros nugatoria, por más que estemos lejos de ser ilotas y aunque tengamos algunos de los elementos que poseen los pueblos más adelantados de la tierra. Sin embargo, nuestro atraso está patente con relación á la cultura de las naciones del Viejo Mundo, y deja de ser pueril para ser absurdo el que pretendamos aventajar á esos países en materia de progreso moral, implantando instituciones que suponen en los pueblos donde se adoptan, ante todo un alto grado de cultura, y con cuya práctica poco tienen que ver los anhelos generosos y los sentimientos altruistas que alberguen los habitantes del Nuevo Mundo.

Trabajemos por que la civilización sienta aquí sus reales, por que se difunda y acrezca la cultura, por que nazcan en la mente bellos ideales y en el corazón nobles aspiraciones, y por que tenga para la generalidad alguna significación el veredicto de la posteridad, y entonces, aunque cunda el materialismo, el hombre obedecerá á elevados estímulos y procurará sobrevivirse lo más posible en la memoria de sus semejantes.

En los pueblos modernos la legislación penal no está en relación con la forma de gobierno, sino con el progreso moral alcanzado; y como los más adelantados de la Europa conservan y mantienen en sus códigos la pena de muerte, la razón universal deduce de esto que es una necesidad dolorosa, pero imprescindible, la de sostener una institución que se juzga con sobrada justicia como la única capaz de asegurar relativamente la inviolabilidad de la vida humana.

Por fortuna hoy día no es necesario decir que la pena capital, una vez instituida, no tiene ni debe tener una aplicación fatal, pues, lejos de eso, la época más venturosa para el linaje humano será aquella en que, establecida la pena de muerte, como una ley de conservación, no se presente el motivo ni se dé el caso de hacer uso de ella.

Así como el pueblo que ama la paz, como la fuente abundosa de todos los bienes, se prepara y apercebe para la guerra, y con ello aleja de sí ese azote, la sociedad, que no quiere ver inmolado á ninguno de sus miembros por el puñal del asesino, decreta la muerte para todos los que maten, con el anhelo de que no se siga matando, con el ansia de que no se mate más.

Y esto es tan obvio y evidente, que la gran mayoría social, juiciosa, sensata, humanitaria, que se horroriza del derramamiento de sangre, que profesa un respeto profundo á la vida de sus miembros, que quiere el amparo más eficaz para todos los derechos legítimos, es precisamente la que aboga por la pena de muerte, la que la pide á gritos, la que clama eternamente por su institución; y lo hace movida por el instinto de conservación, por el sentimiento de justicia innato en el alma y por la profunda convicción, que la reflexión y la experiencia le han sugerido, de que la pena de muerte, en el terreno de la práctica, en el prosaísmo de las cosas, en la realidad de los hechos, es el único contentivo de los grandes criminales, es el solo freno de los que menosprecian la más preciosa de las propiedades de sus semejantes, y la última suprema garantía de la tranquilidad social.

La juventud generosa y llena de entusiasmo por todo lo que levanta y engrandece á la humanidad, ha hecho, inspirada en los más nobles sentimientos, magníficas consideraciones, bellísimos bocetos, verdaderos poemas para atacar como un resto de barbarie la pena de muerte, y proscribirla de los códigos modernos, alegando que ella repugna al sentido moral, que está en choque con los intereses más íntimos de la sociedad y con las tendencias universales del adelanto. Pero cuando el espíritu sereno y desapasionado contempla esas explosiones de filantropía poética, se abisma al considerar que haya quien suponga que la sociedad alberga en su seno caníbales que propendan por el derramamiento de sangre y por inducir al poder público á que la vierta sistemáticamente. Verdad es que hay, por desgracia, seres semejantes en la sociedad, pero, por fortuna, forman una excepción anómala que se halla en una proporción infinitesimal con la inmensa mayoría de la comunidad.

Los que hablan con horror de la pena de muerte, tienen sin duda presente, y creen que los demás deben igualmente tenerla, la horrorosa memoria de las ejecuciones abominables que los déspotas armados han hecho en nombre de la ambición y del fanatismo religioso, ejecuciones que arrancan de la conciencia una maldición interminable contra esos conculcadores del derecho humano. Víctimas políticas ó religiosas, da lo mismo, no hay palabras en la lengua para expresar todo el horror que inspira su sacrificio

y los anatemas que merecen los victimarios, contra los cuales se eleva de todas las almas una indecible reprobación.

Cosa análoga hay que decir de la aplicación que de la pena de muerte se hacía en la Europa de la Edad Media, ultimando á los fallidos y ladrones (que comunmente son uno mismo). Eso era soberanamente inhumano, despiadado é ilógico, porque la sociedad, herida en lo vivo por la aplicación de una legislación tan cruel, se convertía naturalmente en cobertora de las víctimas, para impedir que una pena tan inicua y tan exorbitante, recayese sobre delincuentes para quienes la cárcel era bastante pena.

La peor de las consecuencias naturales de esta legislación, que no vacilamos en llamar bárbara, era la de instigar al delincuente á exceder la esfera de sus desvíos, pues si por sólo el robo y la falencia debía de merecer la muerte, se decidía á cometer también el asesinato, pues esto último, sobre no agravar la pena en perspectiva, lo libraba de un testigo importuno ó de un ejecutor intransigente.

Pero con el criminal atroz, despiadado, empedernido, es todo lo contrario. Sus crímenes nefandos, perpetrados con deliberación, reflexivamente, con la conciencia de su enormidad, la enajenan todas las simpatías, lo hacen indigno de conmiseración y alejan de su juicio toda indulgencia. La indignación que despierta su conducta, la execración con que se mienta su nombre y el clamor por su inmediato y ejemplar castigo, son el mejor testimonio de que la gran mayoría social tiene culto por la virtud y abomina el crimen.

El homicida involuntario, que desgraciadamente lo ha sido contra sus sentimientos, en un lance imprevisto, fatal, inevitable, ofuscada su razón y determinada su voluntad por móviles que no ha podido calificar y por impulsos á que no ha podido resistir,—ese puede corregirse, hay que esperararlo, debe confiarse en su reforma, en que el arrepentimiento lo regenere, y el castigo instructivo le proporcione la enmienda y lo aleje para siempre de la senda peligrosa que ha llegado á hollar, tornándose en miembro útil de la sociedad. Esto es lógico, verosímil y racionalmente seguro, desde que la depravación y el empedernimiento no han asomado su descarnada faz.

Pero el asesino no es el homicida. En tanto que éste, sobrecogido ante un hecho en que antes no había pensado, puede, moralmente, con un torrente de lágrimas, borrar su culpa; aquél que ha procedido con entera calma, con fría deliberación, con alevosía; que ha afilado despacio, en el silencio, sigilosamente, las armas de que ha de servirse para consumir el crimen; que ha tomado calculadamente todas las precauciones que juzga necesarias para hacer ineficaz, impotente, imposible la defensa de la víctima; que le es indiferente el tormento de ésta, y que lo acrecienta con impavidez si lo cree conducente para sus fines; en fin, que hiere, acribilla, tortura sin piedad, sin que las súplicas, las lágrimas, los lamentos, las invocaciones, ni nada tengan eco en su alma exhausta de sensibilidad y de misericordia; ese es incapaz de reforma.

El asesino lo es con frecuencia del autor de sus días, aunque Rómulo no legisló para tal hecho por creerlo imposible; y lo trata con la impiedad que lo haría con un irracional, ya no decimos con el más desconocido de los hombres, y también con frecuencia no lleva otro móvil que el de apoderarse de los bienes de fortuna de la víctima, ó el de librarse de sus impertinencias hijas de la edad. Un descorazonamiento tal, una depravación tan profunda, una perversión tan honda, hacen perder toda esperanza de regeneración. Ni la doctrina más pura, ni la enseñanza más solícita, ni el ejemplo más edificante alcanzarán á rehabilitarlo. Un ser semejante ha llegado á despojarse de los caracteres humanos, y, poseído de una hidrofobia peor que la de la raza canina, es una especie de monstruo bípedo, que es forzoso destruir, arrancar de la sociedad, como se corta en el cuerpo humano un órgano ó porción de él que, descompuesto, y eliminado de la circulación, en vez de concurrir á las funciones de la vida, sólo es propio para perturbarlas y amenazar su extinción.

El asesino no se contiene con la amenaza de una prisión prolongada y severa, ni aun con la de la prisión de por vida. El sabe que la fuga es siempre probable; dice con cinismo que *la cárcel á nadie se come*, y confía en que podrá abandonarla, fuera de la evasión, mediante una de esas convulsiones políticas que cambian el personal de los gobiernos, enrolándose en las filas del *sucesor*, ó bien á virtud de esos indultos en globo, terriblemente inmorales, que los poderes arbitrarios otorgan para crearse prosélitos á expensas de la moralidad. Pero ante la idea de una muerte tan inminente como segura, ese asesino tiembla y reflexiona y se estremece y desiste de sus criminales intentos, porque la vida es un interés que no se expone por ningún otro; y ésta es una verdad que palpita vigorosa en todas las conciencias.

Cuando la sociedad ve ejecutar á uno de esos asesinos célebres ó famosos, lejos de familiarizarse con el asesinato, como algunos pretendían, le cobra más horror y repugnancia, y se contenta, en medio de la terrífica impresión que le causa el patíbulo, al considerar que cada día serán más raros los espectáculos de éste y de los espantosos crímenes que lo reclaman, pues los perversos ya no serán alentados por la esperanza de la impu-



nidad con la evasión del presidio, sino que se arredrarán ante la seguridad de la muerte que la ley les impone inexorablemente en castigo de sus atrocidades, y en resguardo de la vida de los miembros de ella.

Que suprima el asesino el asesinato, y la sociedad, llena de júbilo, suprimirá la pena de muerte, pues ésta no amaga más que á los que causan deliberadamente á otros la pérdida de la vida, fuera del caso de legítima defensa; pero si el asesino no quiere suprimir el asesinato, la sociedad tiene el deber sagrado de impedirlo, y para ello recurre al único medio eficaz de lograrlo, esto es, al de matar al matador.

Se dice que con esto hay dos efusiones de sangre, en vez de una; sofisma. El mal, lejos de aumentarse, se reduce á su mínima expresión. Matando al matador se obtienen dos grandes y benéficos resultados:—el de que el que mató una vez no vuelva á matar más, como podía hacerlo, según la razón lo induce y la experiencia lo ha demostrado; y el de que la muerte del asesino persuada á todos los que tuviesen la tentación de imitarlo, de que se les espera igual suerte, de un modo irremisible. Con este proceder se evitan quién sabe cuántas muertes, pero sin duda muchísimas más que aquella que el Poder público se ve obligado á imponer al asesino. Es seguro que el asesinato no se hace imposible del todo con la ultimación de uno ó más asesinos; pero es de todo punto innegable que la cifra de estos crímenes disminuye grandemente allí donde el gran criminal sólo tiene el gusto de serlo una vez. Y esta reducción por sí sola ya es un argumento en pro de la pena capital, que así representa y confirma el carácter fundamental y trascendente de la sanción penal, que es el de retraer á los miembros de la asociación del sendero hollado por los anteriores criminales, mediante la intimidación.

Es difícil precisar, pero es menester admitirlo como grande, el número de vidas que se preserva con la ejecución de un asesino. Y esto sin tener en cuenta una circunstancia de un interés inapreciable, á saber, que el ejecutado es desde luego un malvado, altamente nocivo á la comunidad, la cual gana mucho al suprimirlo, al paso que la víctima por él inmolada ha sido quizás un miembro selecto de esa comunidad, quien, al desaparecer, ha dejado tal vez en el desamparo y expuestos á la miseria y á la perdición á otros seres que de él dependían. Y lo mismo debe decirse de las víctimas posibles si el asesino subsistiese.

Si la pena capital no amenaza á la gran mayoría social, que la forman hombres de bien; si no amaga ningún interés legítimo de la comunidad, porque sólo es una conminación para los grandes criminales, ¿qué temor puede inspirar jamás á la gente honrada cuya existencia garantiza, cuyo hogar protege, cuyos derechos asegura? Si yo tengo el sentimiento decidido y la inalterable resolución de respetar la vida y derechos de mis semejantes, para que ellos respeten mi vida y mis derechos; si jamás, por ningún motivo, salvo el de perder la razón, me convertiré en asesino, aunque por desgracia llegara en el curso de la vida á verme obligado á matar á alguien, en los casos en que la ley escrita me autoriza á hacerlo, ¿qué me importa que exista la pena de muerte instituida para los delitos atroces? Era menester que ya no fuese hombre de bien, ó que tuviese el propósito de dejar de serlo, para que me pronunciase contra una pena que es la defensa de la sociedad en masa y la salvaguardia de la vida de todos.

Un sentimentalismo ideal, que acusa, cuando menos, sobre de candor y ausencia de filosofía y de sentido práctico, pretende desnaturalizar el fin de las instituciones penales y negar el derecho de la sociedad para resguardar sus grandes intereses, alegando que aquellas sólo deben proponerse la regeneración del delincuente, y que ésta no tiene la facultad de disponer de la vida de sus asociados ó de sus miembros.

Respecto á lo primero, contestamos con el sabio Filangieri, que el objeto fundamental de las leyes penales es satisfacer á la sociedad del agravio que se le infiere con la trasgresión de los preceptos que resguardan su reposo, tranquilizarla por la alarma que produce el delito y asegurarla contra la repetición de nuevas violaciones del derecho. Esto es lo que se entiende por vindicta pública, consagrada por la opinión universal y por el asentimiento unánime de los pueblos de todas las edades, que no sólo reprueban los grandes crímenes, sino que, al imponerse de ellos, cada hombre, por un sentimiento espontáneo, quisiera convertirse en instrumento de la ley para aplicar al criminal el condigno castigo. Es lo que sucede invariablemente con esos parricidios salvajes que presenciamos de vez en cuando, y que hieren tan vivamente á todas las almas honradas, que se eleva de ellas, vigoroso y terrible, el clamor por la expiación del asesino desatentado, por más ajenas que sean al conocimiento de la víctima. Unánimemente se pide que se le haga sufrir á tal criminal un mal idéntico al que él ha causado, no para *regenerarlo*, sino para *eliminar* de la comunidad una fiera semejante. De esto debe concluirse que el fin de la regeneración del criminal sólo se busca cuando es asequible, según el atentado de que él es autor, pero no como fin absoluto, desde que la vindicta pública no debe quedar burlada en perjuicio de los altos intereses de la asociación.

Respecto al derecho con que la sociedad dispone de la vida de sus miembros, hay que decir que ella es originariamente un pacto, tácito sin duda, cuya fórmula contienen las leyes positivas.

El mantenimiento perenne, y en la mayor integridad posible, de ese pacto, está completamente fuera de discusión, como todas las necesidades primordiales de la existencia, porque de otra suerte el orden no sería posible y, sin orden, no se concibe que se mantenga y dure ninguna agrupación humana.

Si la inspiración del bien y todos los ideales de virtud y de honor son impotentes para dirigir á los hombres por el buen sendero, claro está que la coacción se impone como una necesidad fatal; y la experiencia de los siglos ha demostrado lo que la razón establece según sus principios, esto es, que la coacción llena cumplidamente el fin con que se la emplea. He aquí el fundamento de las leyes penales en todos los pueblos desde que la historia nos los da á conocer.

En el estado natural todo hombre tiene derecho para rechazar los ataques que se le dirigen y para devolver los agravios que recibe. En el estado social subsiste este derecho, porque las leyes positivas pueden modificar, pero no anular las naturales; pero en cuanto á la devolución del mal recibido, el hombre ha resignado, por el pacto social, este derecho en la comunidad á quien representa el Poder público; y esa resignación tiene su fórmula positiva en la sanción penal que se ejerce contra todo delito, sin mirar al ofendido.

La venganza individual, ó sea la retaliación ejercida por el ofendido, se resentiría del impulso apasionado, ciego y sin proporción que le imprimiría éste; pero la venganza social está despojada de ese impulso, y tiene por objeto hacer reconocer al delincuente que, al atacar uno de los derechos de sus semejantes, él ha perdido un derecho igual, y que si se le causa un mal equivalente al que él ha causado, es con el fin de que no reincida en tales violaciones, y de que los demás tomen ejemplo en él absteniéndose de imitarlo.

Si esta venganza así ejercida, sin encono, sin cólera, dictada únicamente por la razón colectiva, que es infinitamente más imparcial que la razón individual, llega á mejorar la condición moral del delincuente y á rehabilitarlo á sus propios ojos y á los del público, la sociedad estará de plácemes; pero si este fin no se alcanza, por desgracia, como sucede de ordinario, y el delincuente sale del presidio tal vez peor que cuando ingresó á él, la sociedad no queda por eso destituida de sus medios de defensa, y, por el temor que impone su mano armada del poder de castigar, logra sin duda lo que no lograría por el catequismo y por la exhortación.

Precisamente porque con el castigo del criminal se propone obligarlo á respetar el derecho ajeno, es que se apellida *justicia* á la acción de decretarlo y aun á la de infligirlo; porque, siendo la justicia el reconocimiento del derecho, sería absurdo emplear esta palabra para designar la sanción penal, si ésta, en definitiva ó esencialmente, no constituyese la consagración del derecho.

Resumiendo, el Poder público, en representación de la sociedad, no tiene facultad para disponer de la vida de los asociados, en principio, ni para restringir su libertad, ni para obligarlos á sufrir determinadas imposiciones; pero desde que el individuo viole un derecho ajeno, pierde, *ipso facto*, uno de sus derechos, igual al violado; y no debiendo y, en casos, no pudiendo el ofendido hacer efectiva esa privación, ella corresponde á la sociedad; de aquí deriva ésta el derecho de castigar, que es uno é indivisible; y como el castigo debe ser necesariamente proporcional al delito, como el derecho de que se priva al delincuente debe equivaler al que él viola, para que haya justicia y equidad, la escala de las penas termina con la de muerte, que por eso nunca debe aplicarse más que al asesino, porque lo que es el homicida *no ha tenido* la intención previa y decidida de privar de la vida al occiso. Al obrar así la sociedad, obra autorizada por el derecho natural, en nombre y en obsequio del interés común, en fuerza del instinto de conservación, en ejercicio del derecho indiscutible de defensa y por la necesidad de mantener vigente el pacto que liga á sus miembros.

Niéguense estos principios de orden y de seguridad, y la sociedad carecerá de base y de objeto, y el Poder público de legitimidad y de acción; pero en la constitución actual del mundo, la sociedad no escucha vanas y perjudiciales declaraciones, sino la voz de la razón y el reclamo de sus más vitales intereses, que la impelen á buscar la realización de sus ideales de paz, de armonía y de progreso, y no los gritos del genio del mal que quiere la anarquía y el desquiciamiento.

El último argumento de los utopistas en contra de la pena capital, es que ella destruye pero no corrige al criminal, y que su aplicación multiplica los asesinatos. Como la ley de muerte se aplica al que ha violado la vida de otro, hecho que hace desconfiar en lo absoluto de la enmienda del criminal, la corrección y el ejemplo instructivo tienen sólo lugar con los demás que tuviesen la tentación de seguir las huellas de aquél. Y tal resultado es precioso, pues si una vida vale mucho, muchísimo deben valer varias vidas que se preservan con el sacrificio de una. Dolorosa es la ablación de un miembro del cuerpo humano, y se practica, sin embargo, cuando es el medio racional de conservar los otros miembros y la totalidad del cuerpo.

En cuanto á que el pueblo se desmoralice con la ejecución de los criminales, es del todo inadmisibles en buena lógica. La aplicación recta y justiciera de la ley imprime en el ánimo público un senti-

miento de respeto y de conformidad, que únicamente puede trocarse en el sentimiento contrario cuando la impunidad del crimen subleva los espíritus rectos y siembra la alarma y la desconfianza en todos. Cuando en los tiempos medios se abusó de la pena capital aplicándola á delitos menores, el argumento de la desmoralización pudo valer lo que valen todas las verdades evitantes; pero hoy, que el espíritu filosófico inspira todas las legislaciones, y que la proporcionalidad de las penas es el principio que preside á la confección de los códigos criminales, la pena de muerte, infligida sólo al asesinato, satisface el ansia de justicia, el anhelo de la seguridad y los sentimientos de equidad que abriga el corazón humano. En tales condiciones es perfectamente absurdo suponer que á medida que la muerte se aplica con justicia é inexorabilidad, se multipliquen los crímenes que la hagan necesaria. Por mucho que se diga sobre el desprecio que algunos hombres profesan á la vida, y por mucho que se repita el suicidio, esto no constituirá más que una excepción anómala, y siempre será una verdad tan general como incontestable la de que el individuo profesa un horror instintivo al anonadamiento, aun hallándose en las peores condiciones de adversidad y de desgracia; pues, como ha dicho cierto filósofo, no es el hombre que goza de un relativo bienestar y de cierta suma de felicidad, el que más se preocupa con la idea de la muerte que lo arrancará á esa situación bonancible, sino precisamente el hombre desgraciado que, con serlo, espera todos los días que la suerte lo indemnice de la adversidad á que lo condena su destino fiero, y cree que la muerte puede sorprenderlo tal vez la víspera de entrar en un sendero exento de espinas y acaso tapizado de flores.

Por último, todo lo que deba decirse de lo abominable que es la pena de muerte, es preciso decirlo antes del asesinato; y por eso, porque este crimen es superior á toda execración, porque es absolutamente irreparable, la sociedad tiene el imprescindible deber de procurar hacerlo, sino imposible, lo más remoto que sea dable, y no encuentra, para lograr tal objeto, otro medio que reuna la eficacia y virtud que el patíbulo, y por eso lo han instituido los pueblos más cultos del planeta. La sangre vertida en el patíbulo es, como dice Chateaubriand de la derramada en los campos de batalla, la que la tierra absorbe silenciosa; mas la del asesinato, derramada alevemente, salta gimiendo al cielo, aunque no suceda, por desgracia, lo que el poeta bretón afirma, esto es, que Dios la recoge y la venga, á no ser que se entienda que Dios encomienda esa misión al Poder público de la nación en que tiene lugar el crimen.

Por lo expuesto deseamos ardientemente, en bien de la humanidad, y en nombre de la civilización cristiana, que se consigne en la Constitución de la República Mayor, el artículo 28 que trae el Proyecto de la Dieta; y que si tal entidad no llega á constituirse, de una manera efectiva, se reforme la Constitución de nuestra patria y en ella se consigne este artículo:

“Queda establecida la pena de muerte para el parricidio, aunque se ejecute como simple homicidio; para el asesinato y para los graves delitos militares que enumera el Código de la materia. En los demás casos, y particularmente en los delitos políticos, queda abolida, y su aplicación hará á los que la decreten, reos del crimen de asesinato.”

Gracias: junio de 1898.

JEREMÍAS CISNEROS.

## GACETILLA

“PATRIA” dijo en el número 11 que *La Nueva Escuela* no se pudo fundar, porque el señor Cuaresma no tuvo ánimo para vencer los obstáculos, algunos de los cuales hirieron profundamente su dignidad. Dicho periódico atribuyó al señor Ministro de Instrucción Pública el propósito de ofender al señor Cuaresma. Con este motivo se han cruzado los telegramas que se verán en seguida y que explican lo sucedido, de muy distinta manera de lo que “Patria” afirma:

Tegucigalpa: 10 de agosto de 1898.

Señor don Evaristo Cuaresma.—Juticalpa.

En el número 11 de “Patria” se encuentra un suelto de gaceta referente á Ud. y que entre otras cosas dice lo siguiente: “El señor Ministro de Instrucción Pública, por ejemplo, le dijo que la sociedad desconfiaba porque había sido víctima de muchos charlatanes. Desde ese momento el maestro no quiso seguir luchando.” Como en la última conversación que tuve con Ud. en mi casa y en presencia de don Indalecio Rivera, nada dije á Ud. que pudiera lastimar su reputación y buen nombre, y lejos de eso procuré alentarle en sus esfuerzos ofreciéndole que tal vez en el futuro podría el Gobierno ayudarlo, con alguna subvención; me ha extrañado sobremanera que se tergiversa la conversación y se le dé un sentido contrario al que tuvo como muy bien lo sabe Ud. Deseo saber si el señor Moncada está autorizado por Ud. para decir lo que le he trascrito.

Su afectísimo.

CÉSAR BONILLA.

Juticalpa: 11 de agosto de 1898.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Estoy apenadísimo por haberse hecho pública parte de nuestra conversación y que yo referí á Moncada en el seno de la confianza por ser el más entusiasta por mi idea; no lo autoricé *ni me nos para darle un mal sentido*; pero creo que él habló á impulsos de la amargura que causa la decepción, pues me auguraba un éxito feliz. Una desesperada situación pecuniaria me hizo desistir; pero sin resentimientos de ninguna especie, esperando tiempos más propicios. Perdónese, señor, este accidente desagradable y esté seguro de la estimación de su afmo. S. S.

EVARISTO CUARESMA.

Tip. Nacional.—Tercera Avenida E., Núm 42.